



# AINKAA

---

Revista de Estudiantes de Ciencia Política  
Volumen 5 - N° 9-10 / e-ISSN: 2590-7832  
Enero - diciembre de 2021

**Recibido:** 09-06-2021

**Aceptado:** 16-08-2021

**Cómo citar esta traducción:** Hylton, J.  
(2021). Mapeo cognitivo en la zona del  
terror: una elegía a Colombia (Trad. C. He-  
nao-Ortiz). *Ainkaa*, Revista de Estudiantes de Ciencia  
Política, 5(9-10), 168-188

## Traducción. Mapeo cognitivo en la zona del terror: una elegía a Colombia

---

**Forrest Hylton**

Traducción de  
Carolina Henao Ortiz  
Universidad de Antioquia, Colombia





AINKAA

# Mapeo cognitivo en la zona del terror: una elegía a Colombia\*

---

## Cognitive mapping in the terror zone: an elegy for Colombia

---

Forrest Hylton\*\*

Traducción de Carolina Henao Ortiz\*\*\*

“ La historia es un medio de aprendizaje... Solo al entender lo que fuimos es posible ver cuánto hemos cambiado, entender el proceso y la naturaleza de estos cambios y ganar perspectiva sobre lo que somos. La experiencia histórica no se trata de estar en el presente y mirar hacia atrás. Se trata de entrar en el pasado y regresar al presente con una consciencia más amplia y fuerte de las limitaciones de nuestra perspectiva anterior. Regresamos con una conciencia más amplia de las alternativas disponibles y con una perspicacia más afinada para tomar decisiones. De esta manera es posible soltar el peso muerto del pasado y transformarlo en una herramienta viva para el presente y el futuro... Este enriquecimiento y mejoría que se obtiene a través de la investigación y la reflexión es la esencia de ser humano y el centro del método histórico”.

William Appleman Williams, *History as a Way of Learning*

---

\* Texto original: Hylton, F. (2020). Cognitive mapping in the terror zone: an elegy for Colombia. *Dialectical Anthropology*, 44(3), 279-292. <https://doi.org/10.1007/s10624-020-09605-2>

\*\* Ph.D. en Latin American History por la New York University, Estados Unidos. Profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Departamento de Ciencia Política. [forresthylton@gmail.com](mailto:forresthylton@gmail.com)

\*\*\* Traductora Inglés-Francés-Español por la Universidad de Antioquia, Colombia. [carolina.henao9@udea.edu.co](mailto:carolina.henao9@udea.edu.co); [caro.h0623@gmail.com](mailto:caro.h0623@gmail.com)

## Introducción

En algún punto me convertí en un académico itinerante, así que mis libros están empacados en cajas otra vez. No puedo referirme fácilmente a la llamada —ahora olvidada— de Frederic Jameson a encontrar mejores maneras de describir, explicar y representar las nuevas configuraciones de producción de mercancía y de reproducción social y las nuevas experiencias colectivas de tiempo y espacio que vienen con ellas bajo el “capitalismo tardío”. El término se tomó prestado de un volumen enorme del mismo nombre del economista belga y trotskista Ernest Mandel, mediante el cual supongo que Jameson se refería al neoliberalismo y al dominio de la oligarquía inmobiliaria, financiera y de seguros (podría buscarse en Google, pero no es necesario). Ni la alta teoría de la academia noratlántica de la década de los ochenta —ni mucho menos la más mercantilizada de la década de 2010— nos va a guiar, excepto para sugerir que necesitamos mejores guías.

Debido al giro cultural, a la coyuntura política actual y a la crisis capitalista sin precedentes precipitada por la primera pandemia del siglo, esto sigue siendo verdad tal como cuando Jameson formuló su frase otrora famosa.

Intentaré realizarlo [mapeo cognitivo] a través de una descripción detallada de la vida cotidiana —en cuarentena— en mi barrio. En la conclusión, con la ayuda de la colección publicada póstumamente de los ensayos de E. P. Thompson, llamada *Making History* y del *Libro de los pasajes* de Walter Benjamin, analizo la teoría y

el método en la historia y la antropología, las cuales se necesitan la una a la otra ahora más que nunca, pero no pueden encontrarse en la oscuridad actual. También reflexiono sobre el espacio en relación con el poder, así como sobre el tema controversial de la escala. ¿Cómo pensar acerca de mi barrio, Carlos E. Restrepo, en relación con la ciudad de Medellín y con la región metropolitana del Valle de Aburrá?, ¿con las llanuras pacíficas y caribeñas en Urabá, Antioquia (de la cual Medellín es la capital), Córdoba y el Chocó (“endogeneidad”, “negritud”, ¿y zonas fronterizas?) y, ¿con el Estado nación colombiano radicado en Bogotá; y con el hemisferio occidental dominado por Estados Unidos?

La forma experimental del artículo es un esfuerzo por adaptar el contenido caótico de la zona de terror y el método es lo que el poeta Charles Olson denominó una apertura al campo.

## Configuración del terreno

Antes del cambio climático Medellín era conocida como la ciudad de la eterna primavera: fundada en 1675 en un amplio valle subtropical (1500-1600 m), rodeado de paredes de montañas que se elevan a mil metros por todos los lados, temperaturas con largos promedios de entre 18 y 22 °C, y con variación estacional mínima y brisas frescas que usualmente van en dirección norte-sur. Las “estaciones” son episodios cortos de lluvia que se presentan dos veces al año, en mayo y octubre, con precipitación suficiente el resto del

año. Medellín ha sido por mucho tiempo la segunda ciudad más grande de Colombia, con una población de más de 3,7 millones en el área metropolitana. Por su parte, Antioquia es el departamento más poblado (después del distrito capital de Bogotá), con más de 6,4 millones de habitantes, y uno de los más grandes, similar a Texas o California. Actualmente, la ciudad tiene la peor contaminación ambiental del país debido a que se talaron árboles para dar espacio a los edificios medio vacíos de muchos pisos, al calor atrapado en el asfalto y al aumento de temperaturas, que de vez en cuando alcanzan los 31 °C y a menudo los 28 °C. Generalmente, desde las 11:30 a.m. hasta las 5:00-5:30 p.m. el sol es agotador. Mucha gente lleva sombrillas.

Antioquia también es el hogar de las tradiciones más conservadoras del catolicismo en el país y de los patrones más agresivos de expansión colonizadora y acumulación de capital en su interior: en el sur, en el valle interandino del llamado cinturón del café; en el norte, en las llanuras costeras caribeñas de Urabá y Córdoba y en el noroeste, en la región selvática pacífica del Chocó. Durante siglos y a través de redes comerciales a larga distancia, los comerciantes de Medellín y Antioquia controlaron los términos de intercambio más que la producción o la propiedad, tanto en las regiones cafeteras subtropicales en el centro andino como en las llanuras fronterizas donde predominaba en su mayoría población descendiente de africanos, indígenas y mestizos.

A finales del siglo diecinueve y como resultado de su poder estratégico en el comercio del café, los comerciantes

antioqueños acumularon suficiente capital para abrir empresas industriales y de banca (especialmente en la industria textil y la industria ligera), y para posicionarse como la vanguardia de la modernidad colombiana durante el siglo veinte. Debido a que las industrias importantes entraron en crisis y en descenso en la década de los setenta y a que la ciudad/país había llevado a cabo una transición al modelo basado en el negocio inmobiliario, financiero y de seguros, a finales de la misma década, Medellín y Antioquia sobresalieron por estar a la vanguardia de la producción y circulación del producto de exportación más reciente del país: la cocaína. Desde entonces, la ciudad y la región, así como los departamentos cercanos del Chocó y Córdoba, han sufrido algunos de los niveles más altos de homicidios, masacres y desplazamiento forzado en el país y en el hemisferio, ya que la clase, la raza-etnia y el Estado contrainsurgente respaldado por Estados Unidos los han convertido en un caldero de violencia y terror que no ha disminuido.

Este es el amplio contexto histórico-geográfico sin el cual no podemos entender cómo se ha desarrollado la crisis de la COVID-19 en la ciudad, en la región, en su interior o en sus fronteras. En la actualidad, dichas fronteras son la base de la minería de capital intensivo, de las empresas agroindustriales y de energía, así como de los campos de coca, de las exportaciones de cocaína y las importaciones de armas, de los ejércitos paramilitares y de las insurgencias armadas de la guerrilla. Ellos son los causantes de la mayoría de los refugiados desfavorecidos de La Iguañá, el barrio

marginal ubicado junto a la quebrada que separa mi barrio de mi universidad.

Para describir de manera general la evolución de la COVID-19 en Colombia y de la respuesta del gobierno, se puede decir que al igual que Brasil, Chile y Perú, los casos y las muertes se dirigen a un crecimiento asintótico. Hasta el 23 de julio, con una población de 50 millones, Colombia era el número uno en el mundo en casos por millón y, hasta el 26 de julio, había 240 793 casos (120 000 recuperados) y 8268 muertes. Después de varios meses de cuarentena y la baja cantidad de casos en abril y mayo, bajo la presión de los grupos de presión empresariales, en junio, el presidente Duque y los alcaldes flexibilizaron la cuarentena. Como era de esperarse, a mediados de junio los nuevos casos alcanzaron la cifra de 2000 por día y entre mediados y finales de julio, Colombia registraba 8000 nuevos casos por día, los cuales estaban concentrados en las ciudades principales: Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali.

En Latinoamérica, solo México y Brasil están por delante en términos de muertes por día y tienen poblaciones 2,5 y cuatro veces más grandes que Colombia, respectivamente. Lo más probable es que los sistemas de salud en las ciudades principales colapsen en las próximas semanas. Aparte de estos, no hay verdaderos sistemas de salud que mencionar. Gracias, en parte, al expresidente Álvaro Uribe, quien fue senador a inicios de la década de los noventa, el sistema de salud se privatizó según el modelo estadounidense y luego se masificó según el modelo colombiano

contrainsurgente respaldado por Estados Unidos e impulsado por el narcotráfico.

De esta manera, tal como mencionó *The Lancet* recientemente, el sistema de salud se ha convertido en otro nexo del crimen y la corrupción: en las regiones rurales fronterizas en el Amazonas y el Pacífico, y en la costa caribeña, los vínculos entre la prestación de servicios médicos y los narcoparamilitares son endémicos. Más del 60 % de la población activa colombiana trabaja en la economía informal (más de 10 millones de colombianos están clasificados como pobres —una estimación bastante moderada—), por lo que no hay manera de quedarse en casa. Además, gran parte de la población rural carece de agua corriente. La situación de los afrocolombianos en el Pacífico es pésima: sin hospitales principales, el Chocó alcanzó su capacidad en junio debido a que los casos aumentaron 1700 %, con casi 3000 casos y 83 muertes registradas el 24 de julio. Solo hay cuatro municipios a los que no ha llegado la COVID-19, y lo peor está por llegar. Asimismo, el gobierno colombiano declaró dos días de compras sin IVA, los cuales, tal como estaba previsto, resultaron ser eventos supercontagadores.

Desde marzo, las fuerzas de seguridad del gobierno han asesinado a más de 30 y han herido a más de 150 personas en protestas en contra del hambre y la austeridad. Por otro lado, las organizaciones narcoparamilitares impusieron sus propias cuarentenas y toques de queda; esto sin mencionar la justicia severa, pues ejecutaron a nueve personas. Cada semana, afrocolombianos, indígenas y excombatientes

de las FARC son asesinados presuntamente por organizaciones narcoparamilitares o fuerzas de seguridad. Rara vez se identifica a los asesinos, mucho menos se les captura.

Al parecer, en poco tiempo se les cobrará a las personas las facturas de servicios sin pagar de 3 o 4 meses, lo que significa que perderán el agua, el gas y la electricidad. En este momento, los propietarios están en una ofensiva de cobro de alquiler. Sus métodos de desarraigo y desplazamiento serán en su mayoría ilegales y, de ser necesario, violentos. Además, lo más seguro es que no habrá consecuencias. Si lo necesitan, pueden llamar a los narcoparamilitares. Esto era cierto antes y es mucho más cierto ahora.

Por eso, la relativa paz y el maravilloso paisaje de mi barrio son engañosos. Por ejemplo, en marzo, mi vecina Sara Fernández, una estudiosa destacada del género y la sexualidad, estuvo a punto de ser asesinada en su cama debido a su activismo sindical. Sara, profesora de la Universidad de Antioquia, había sido amenazada previamente esa semana por ayudar a dirigir una huelga en contra de la represión policial y la violación de la autonomía universitaria. (En 2015, un profesor de la Universidad Nacional, donde trabajo, fue asesinado mientras caminaba del trabajo hacia su casa en Carlos E., pero eso fue debido a asuntos del barrio, específicamente a negocios inmobiliarios, y no relacionado a asuntos de la universidad o a las políticas del sindicato). Aun así, nuestros guardias de seguridad privada del barrio patrullan constantemente. De hecho, son amigables y fáciles de identificar gracias

a sus uniformes grises, gorras de béisbol, radios, audífonos, escopetas recortadas y chalecos negros. Gracias a sus gritos y a su resistencia —ella luchó contra su agresor— pudieron atrapar al presunto atacante de Sara y llevarlo a la policía.

Lo más probable es que la inteligencia militar o la policía lo contrataron, ya que, en una ciudad llena de jóvenes sicarios a sueldo, el agresor no era profesional. Las mafias narcoparamilitares locales que dirigen los barrios de las laderas de la montaña y el río, así como el centro de la ciudad, y que están respaldadas por las facciones en guerra del cartel mexicano —según consta, Sinaloa, Jalisco y Michoacán— nunca hubieran hecho mal el trabajo. El 7 de julio, ellos (lo más probable) desaparecieron a Mateo Martínez Ruíz, un egresado del departamento de historia de la Universidad Nacional, a quien conocí personalmente gracias a discusiones y debates políticos. Demás que la policía local los ayudó. Nunca sabremos porque Mateo desapareció en el norteño y desindustrializado municipio periférico de Bello, el cual es la zona cero para la asociación de crimen organizado (Oficina de Envigado) y actualmente es una zona de guerra de las facciones rivales. Los cuerpos de los desaparecidos no aparecen en Bello porque son descuartizados.

Yo conocía la historia sangrienta y terrible de la ciudad en cuanto a la lucha de clases, la formación estatal y la acumulación de capital, y había escrito sobre ella; sin embargo, con la elección de Iván Duque en 2018 y con Federico Gutiérrez como alcalde y nuevo sheriff en la ciudad,

la situación empeoró rápidamente en diciembre de 2017, después de la captura de alias “Carlos Chata”, el capo de Bello. Llegué en junio de ese año. Estaba emocionado con la idea de trabajar con estudiantes que no ven la educación como un negocio o a sí mismos como consumidores y cuyo compromiso y capacidad para democratizar la sociedad a través de la movilización es inigualable en el hemisferio. Lograron dos paros estudiantiles exitosos en 2018 y 2019, de los cuales el segundo desencadenó un paro general a nivel nacional en contra de la austeridad y el autoritarismo en una escala e intensidad no vistas desde 1977. Cualesquiera que sean sus límites, y son muchos, los estudiantes colombianos se han convertido en la vanguardia de una izquierda urbana emergente. Ha sido un privilegio trabajar con ellos y junto a mis colegas en el sindicato. Aprendí una o dos lecciones acerca de la solidaridad: aquí no hay espacio para el teatro Kabuki.

Sara Fernández y yo somos afortunados de residir en Carlos E. Restrepo, llamado de esta manera por el presidente colombiano que fijó el precio de Panamá lejos de Estados Unidos y quien era oriundo de Medellín. Está lleno de zonas verdes y está cerca de las dos universidades públicas, la Nacional y la de Antioquia (y casi contiguo geográficamente a la Nacional, por lo que voy caminando al trabajo). Tiene docenas de bloques de apartamentos de ladrillo y de concreto de no más de cuatro pisos y fue diseñado por el Instituto Territorial de Crédito (ITC) como vivienda pública para la clase medio-baja a inicios de la década de los setenta. Se privatizó

y gentrificó a inicios de la década de los noventa. (Sara y yo tendremos la suerte de salir del país lo antes posible, aunque, por supuesto, nadie ha intentado matarme porque tengo pasaporte estadounidense y no lidero a nadie). Hay más profesores de universidades públicas en Carlos E. que en cualquier otra parte de la ciudad, por lo que el intento de homicidio de Sara Fernández fue un mensaje para todos nosotros, aunque Sara es muy superior al resto, es por eso que era un objetivo.

La movilidad de aquellos de nosotros lo suficientemente afortunados para vivir en Carlos E. —personas con pequeños negocios, profesionales y gerentes, jubilados, estudiantes y familias jóvenes— se ha restringido rápidamente debido a la cuarentena. También ha aumentado nuestro miedo a la policía, que patrulla constantemente y multa a las personas por USD 350 por cualquier razón que se les ocurra. El privilegio de clase ya no nos protege del abuso y el acoso. Ellos aterrorizan deliberada e indiscriminadamente, porque no hay pruebas reales de cómo interpretan la cuarentena. Por ejemplo, a un repartidor venezolano que trabaja en el mercado del barrio abajo de mi apartamento, los policías lo detuvieron y lo multaron porque estaba manejando su bicicleta con el tapabocas en el mentón para poder respirar mejor. La buena noticia es que el sistema que procesa las multas colapsó, entonces podría no pagarla si así lo quisiera: como sucede a menudo aquí, es una cruel farsa.

Los policías, que visten uniformes verde oliva y, por supuesto, portan armas, son amigos de los dueños de la tienda de



abajo, que no son originalmente de Carlos E., pero que viven dos pisos encima de mí. Entonces los policías parquean sus motos Honda color verde brillante y sus cascos bajo mi ventana varias veces al día, tres o cuatro veces los domingos o días festivos. Es difícil extorsionar a ciudadanos inocentes cuando hay tan pocos circulando, entonces, por lo visto, la policía necesita descansar mucho más de lo normal durante la cuarentena. Llamen a sus superiores y les mienten, llaman a sus novias para poder engañar a sus esposas antes de dirigirse a casa, este tipo de cosas. En Cali, recientemente algunos policías dispararon balas reales a las personas que los estaban grabando mientras golpeaban a un “sospechoso” en la calle y en presencia de niños. Esto no fue un único evento. Nunca lo es.

Excepto por los tenderos —quienes probablemente estén del lado de la ley y el desorden o hagan la distinción de policía bueno-malo (siempre dudosa, especialmente en Colombia), y que en muchos casos son recién llegados como yo—, mis vecinos y yo siempre estamos furiosos y preocupados. Hace 34 años mi vecina del piso de arriba, Gloria Sánchez, abrió el primer restaurante al aire libre, llamado La Comedia, justo abajo de mi ventana. (Actualmente, la zona al aire libre con bancas y árboles está llena de cafés y restaurantes y de artesanos que venden joyas, libros, elepés, parafernalia para fumar, afiches y ropa, o al menos lo estaba hasta antes de que la COVID-19 los desvaneciera). Ella y sus hermanas y hermanos son de una región cafetera en Bolívar, en el suroeste de Antioquia. El lugar es semillero de blancos

fanáticos católicos de derecha, de los cuales más del 90 % votaron por Álvaro Uribe; sin embargo, ella y sus hermanos, como librepensadores ateos de izquierda, dicen lo que piensan, incluso a los policías que los acosan y los multan.

Durante meses, Gloria y su esposo Roger no han pagado su alquiler comercial y, además, están estresados y luchan por entregar el almuerzo a vecinos como yo. Antes de la COVID-19, La Comedia era el centro de operaciones de médicos bohemios, matemáticos, músicos, periodistas, artistas, abogados, activistas, gerentes de clase media y parejas de todas las edades. Permanecía llena de 11:30 a.m. a 11 p.m. todos los días, excepto los domingos. Gloria se reía ante las dificultades relacionadas con el papeleo, las regulaciones municipales, los proveedores y los acreedores. Ella era imperturbable.

Ahora ella está ansiosa. Algunos días no puede traerme el almuerzo porque soy su único cliente. Un día me interrumpió mientras escribía para traerme el almuerzo, luego me preguntó si podía guardar un secreto. Resulta que está cansada. No hay manera de seguir en el negocio. Va a regresar a Bolívar a cultivar verduras orgánicas y a dirigir un pequeño restaurante allí. Sin Gloria y Roger, quienes alimentaban a los tres gatos que habitan el patio y las escalas todos los días, y sin Sara, el barrio se cae. Esto no tiene precedentes. Se le llenan los ojos de lágrimas cuando habla acerca de lo que está pasando.

Gracias a personas como Gloria y Sara, Carlos E. siempre ha sido un centro para el libre pensamiento y el

disentimiento. Esto puede ser una razón por la cual la vigilancia policial se ha vuelto tan estricta durante la cuarentena, a pesar de que esta es una de las zonas más homogéneas de clase media y menos conflictivas de la ciudad (aparte del intento de homicidio ocasional de nuestros colegas de la unión sindical, por supuesto).

En las épocas de normalidad, Carlos E. es una zona de soberanía ciudadana, de dominio de barrio y en la que la policía está controlada. Es una “zona de tolerancia” (una idea muy católica: crear un lugar especial para el pecado) en la que los jóvenes —en su mayoría estudiantes universitarios de clase media en los viejos tiempos y actualmente el precariado de clase trabajadora— se reúnen en masa al aire libre, en las bancas del parque, a beber vino, licor y mucha cerveza y a fumar marihuana. A diferencia del pasado, el microtráfico de droga es constante después de que anochece. Ahora, ellos inhalan y fuman cocaína y, en menor grado, heroína (ambas producidas localmente y en su mayoría para exportación, en cantidades nunca vistas: la industria ha estado creciendo en los últimos años). Nadie se mete en peleas físicas, ni siquiera en altercados reales. Aunque a veces, después de largas borracheras, un chico del barrio adicto a la cocaína pelea consigo mismo e insulta, fuertemente, a nadie en particular. Las personas generalmente lo evitan. A veces, los guardias de seguridad tienen que calmarlo o llevarlo a su casa. Ese es nuestro barrio. Aparte de él, hay poco espacio público en la ciudad. Pero ese también está muriendo.

## Vistas y sonidos

Tuve que empezar a correr porque la piscina de la universidad, como todas las otras en el país, ha estado cerrada desde marzo. Nuestra ruta para correr nos lleva alrededor de los límites del barrio con las arterias principales de la ciudad —de modo que señala las subregiones y las zonas fronterizas afroindígenas— y nos presenta vistas y sonidos. También nos presenta personas cuyo trabajo, en su mayoría informal, nos permite entender cómo la separación del trabajo y el espacio se superpone en las redes ilícitas y lícitas de la circulación y el consumo capitalistas: aquí no se produce ninguna mercancía de valor excepto la cocaína e industrias derivadas como la construcción y el mercado inmobiliario para el lavado de dinero. Como se mencionó, la economía regional está basada en servicios y, desde hace un año, el índice de desempleo oficial se duplicó, lo que significa que quizás se triplicó al 30 % aproximadamente.

Aparte de los estudiantes, vine por la flora y la fauna. Esto comienza antes de despertarme con un sueño acerca del *barrenquero* local, el pájaro de cola larga con plumas color azul cielo, alas verdes y amarillas y lomo que se vuelve color turquesa, parte baja y cabeza amarillo-verdosas, mentón verde, con una línea turquesa en la parte superior, coronilla y pico negros, ojos rojos y máscara negra, que a veces viene a posarse en el alféizar de mi ventana y que una vez entró en la habitación en la que está mi hamaca. En la vida real, tuve que abrir las ventanas lo más que se pueda para que pueda salir a través de las barras de hierro. En el sueño

estaba intentando hablarme sobre las dificultades de entrar y salir y pidiéndome que mejorara el espacio. Intenté expresar mis límites y mi disposición a cumplir dentro de mis posibilidades.

Me desperté para alimentar con plátanos a los pájaros que están en el alféizar de la ventana de la otra habitación —son de color azul cielo y gris, o verdes y amarillos— y luego para echarle agua a las plantas del balcón, desde donde se ven en todo su esplendor los jardines a nivel del suelo del vecino, con palmeras y arbustos grandes con un dosel de flores rojas. También se ven las flores moradas, naranjas y blancas en los jardines que están alrededor de los patios interiores. Los cactus de tipo *agave*, de color verde claro, sobresalen de las esquinas. Mi jardín florece bien, con una planta de lulo de la que brota una hoja. Las plantas más grandes se entrelazan entre sí y entre las barras del balcón. Está formado de varios tonos de verde, con una que otra flor naranja que parece la cresta de un gallo, de un gran plátano, y del rojo del hibisco que florece de vez en cuando con estambres de punta amarilla. Desde marzo, ese es mi principal contacto con la naturaleza.

Para el desayuno, tengo piña fresca, papaya, mango, fresas, arándanos, plátanos y, de vez en cuando, pitaya o maracuyá: más naranja, rojo, amarillo y azul. A lo que se suma el color oscuro del café fresco (cultivado localmente), un recordatorio de que la mayor parte del siglo veinte la economía colombiana dependía de la exportación de café, en vez de la de cocaína o de la industria minero-energética. Si me

quedo sin frutas hay muchos vendedores, en su mayoría venezolanos indocumentados, que venden sus mercancías a través de sus megáfonos: siete mangos por 2000 pesos colombianos (1 USD = 3645 COP), piña o mango por 1000 y papaya y aguacate por 2000. Generalmente le compro a un chico que vive en La Iguaná, el barrio marginal en frente de la quebrada de Carlos E. Usa un sombrero de vaquero, escucha salsa clásica y vende frutas en su triciclo motorizado, con el que maneja alrededor de barrio y desde el que grita saludos graciosos a los vecinos y a los transeúntes.

Mucho antes de que los vendedores ambulantes estén de un lado para el otro, se puede escuchar a los helicópteros, avionetas, aviones, volquetas, buses, vehículos de transporte de carga y motos. Es más, como un zumbido, un latido o un estruendo que un ruido fuerte en sí mismo, aunque a muchos motociclistas les gusta sacar el aliento, digamos, a las 3 a.m., y a veces los helicópteros vuelan bajo. El nivel de ruido está relacionado con los niveles de contaminación ambiental, los cuales matan a más de una docena de miles de personas por año debido a enfermedades respiratorias: ambos hacen que escribir sea difícil. Cuando los niveles de toxicidad de las partículas en suspensión (PM, por sus siglas en inglés) de menos de 2,5 micras están de seis a nueve veces más altos que los niveles recomendados por la OMS, la respiración de partículas invisibles de metal pesado afecta el cerebro. Eso mismo hace el ruido, por supuesto, porque uno no puede escuchar sus propios pensamientos, excepto en cuarentena

total, cuando el canto de las aves domina el entorno auditivo. En ese momento, el silencio relativo es escalofriante, incluso perturbador. Tiene el mismo efecto que el que sufre una persona de ciudad al pasar una noche en el campo, uno se da cuenta de que estaba agotado y estresado y entonces descansa mejor, incluso excesivamente. Uno escucha sus pensamientos.

Hasta que el tránsito vuelve a la normalidad. Hay dos razones por las que aquí el ruido del tránsito y la contaminación ambiental no se comparan con las de ningún lugar en América, a menos que uno haya estado en Santiago o en Ciudad de México. Primero, no hay un sistema de transporte público integrado como la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) de Nueva York (es cierto que el estándar es bajo), por lo que las líneas de buses operan de manera privada por la mafia y sin regulación estatal. Segundo, la industria del cemento y la construcción, de la que también es dueña y que también opera la mafia (al menos en parte), es una operación gigante de lavado de dinero, por lo que necesita moverse rápido, preferiblemente a todas las horas del día y la noche, sin regulación estatal. Muchos de los nuevos conjuntos residenciales y apartamentos no se llenarán nunca. No están diseñados para estarlo. Son solo propiedades de inversión, como Miami o Nueva York. Medellín City, como la llaman los publicistas. Hay un metro que cubre cada vez más la ciudad a través del teleférico, pero su cobertura es desigual. Por ejemplo, en mi lado del río Medellín, la mayoría de las

personas todavía utilizan bus (que cuesta 2000 COP) y normalmente deben tomar dos. El metro cuesta 2750 COP (con teleférico incluido), pero muchas personas utilizan tanto el metro como el tranvía, es decir, 2000 extras. Por lo que para la mayoría resulta ser 750 COP más para utilizar el metro, y muchos no pueden pagarlo.

Al final de la mañana casi siempre está soleado y hace calor. Imaginen las avenidas como una red de ríos o como alcantarillas de monóxido de carbono, con uniformados con casco, en su mayoría hombres proletarios de servicio que van en motos como bancos de peces hechos de carne, Plexiglass y hierro. Los domingos, los festivos y los días en cuarentena el tráfico se reduce y la mañana es fresca, más como en cualquier ciudad normal de Latinoamérica, Cali o Barranquilla, por ejemplo. Por una vez, uno puede escuchar la brisa, especialmente en un domingo en el que la cuarentena es obligatoria. De lo contrario, el ruido —de los frenos hidráulicos y de los motores— es abrumador, como el hollín. Cuando el semáforo cambia, el ruido es como las olas de un mar demoníaco y tóxico que choca con la orilla.

Justo al sur de nosotros está la avenida Colombia, la cual tiene seis carriles y conecta con el centro de la ciudad al cruzar el río Medellín, el cual separa el oriente del occidente. Nuestra ruta nos lleva a una de las pocas bibliotecas funcionales de la ciudad —los complejos “Parques Biblioteca” que le consiguieron a Medellín tanto reconocimiento en la prensa internacional resultaron ser un elaborado fraude de relaciones públicas tipo Pueblo

Potemkin— y que conecta con la Torre de la Memoria, en la que alguna vez se realizaron eventos públicos de relevancia política. Por supuesto, todos han sido cerrados desde marzo y quien sabe cuál es el estado de sus empleados asalariados; es probable que los permanentes tengan un sindicato. Seguramente al resto los han despedido.

Antes de llegar a la autopista norte-sur, la cual tiene tres carriles en cada lado y es la arteria principal de la ciudad, nos desviamos a los confines de Carlos E. donde hay hibiscos rojos y amarillos en un mismo arbusto y donde las personas han cultivado pequeños y elaborados jardines afuera de las puertas principales y debajo de las ventanas. Hay una planta que tiene un estambre rojo y largo como la cola de una serpiente de cascabel; otra con lo que parece una bola de sóftbol amarillenta de materia cerebral; helechos verdes, palmeras y frondas de todo tipo; árboles con flores blancas, con vides suntuosas, además de árboles de naranja, mango y limón, y un lugar para que los niños jueguen y los mayores y los adolescentes se sienten.

Ahora casi siempre está vacío, excepto por el ciudadano mayor y solitario que practica fisicoculturismo al estilo de Tony Atlas y que se tonifica con ejercicios en las barras. Nos saludamos efusivamente. El otro día, durante una cuarentena estricta en la que no se permite que nadie salga, llegaron unos jóvenes venezolanos con un niño en un coche y recurrieron a los vecinos para que les dieran de comer. Tenemos hambre, se quejaban. Varias veces a la semana, algunos venezolanos hambrientos pasan por mi bloque pidiendo limosna.

Nadie los molesta o los trata mal, y generalmente los vecinos los ayudan. Si hay xenofobia en mi barrio, ninguno de mis amigos venezolanos lo ha mencionado, y nosotros criticamos a los colombianos sin reservas y con humor.

Al continuar al norte, cruzamos la av. 65 que circula al occidente hacia los barrios conflictivos de las laderas del centro y del noroccidente (Comuna 13, Comuna 10 [sic], Robledo y Castilla), hogar de oleadas de afrocolombianos, así como de inmigrantes mestizos de Urabá en el Caribe y de los departamentos adyacentes del Chocó y Córdoba (sobre los que comento más adelante). Estas zonas son cruciales para la exportación de cocaína y la importación de armas debido a que conectan el Pacífico, el Caribe y los Andes, y la ciudad con sus llanuras ricas en minerales y energía agroindustrial al oeste y noroeste. Estas zonas son controladas por coaliciones cambiantes de facciones en guerra de la mafia, que, a su vez, están aliadas con facciones diferentes y en disputa del crimen organizado mexicano, por no mencionar algunos aspectos de las fuerzas de seguridad local, tanto públicas como privadas (una diferencia que se anula en el campo).

Al cruzar la av. 65, entramos en la franja preciosa, estrecha y pantanosa de tierra de nadie que separa Carlos E. Restrepo del barrio marginal de La Iguaaná, donde una quebrada fluye en descenso junto al borde de la franja y se crece después de las lluvias. Durante la cuarentena total esta franja permanece atterradoramente vacía, así como cuando, durante los días de semana y cuando la cuarentena se flexibiliza,

abunda en vida (en su mayoría masculina) y gran parte de ella ilícita. Me detuve a orinar en los arbustos y vi un pequeño pitillo y una bolsa de coca vacía debajo de mis pies. Hay muchas más tiradas alrededor. También hay ladrillos rotos cerca. Los delincuentes patrullan el lugar. Hay grandes plantas parecidas a las *agaves*, de color amarillo verdoso y que se elevan hasta 2 m, y cintas pequeñas de rayas blancas y verdes que bordean el camino. Atravesamos una cancha de fútbol de arena y gravilla, donde los adolescentes y los niños de La Iguaná, muchos de ellos de piel negra u oscura, practican cuando pueden.

Alrededor de las mesas, en el camino, en los arbustos y en los bancos, los desfavorecidos fuman hierba (técnicamente legal pero perseguida frecuentemente en público), pasan el rato, planean y coordinan actividades ilícitas y hablan sin miedo a ser abordados por la policía. Los itinerantes vendedores ambulantes y repartidores venezolanos que conozco también van allí, presuntamente por la misma razón (excepto por el crimen, pues la mayoría de los venezolanos, como la mayoría de los colombianos, optan por el trabajo honesto que no da frutos), por lo que a menudo veo gente conocida. A veces fumamos y hablamos. Todos están atrasados con todos los pagos y preocupados por conseguir el alquiler.

Antes de llegar al final del camino, en la autopista norte-sur vemos un anuncio pegado en un poste de la luz de un hombre de 30 años que desapareció recientemente de La Iguaná, donde las personas son asesinadas todo el tiempo sin

que esto se denuncie, pues las mafias narcoparamilitares dirigen las cosas. Ellos han supervisado la distribución limitada de comida que ha existido durante la pandemia, mientras que las ayudas del gobierno se ven envueltas en escándalos de corrupción. Indudablemente financian las campañas políticas locales, que son la clave real de su poder junto con sus relaciones con los comerciantes locales y los dueños de los negocios.

Al final del camino, normalmente le doy una poca cantidad de dinero a dos jóvenes venezolanas que tienen niños y piden limosna en el semáforo de la av. 65 [sic] que conecta con la autopista norte-sur, aunque en un día normal, hay varias víctimas merecedoras del dinero que trabajan limpiando vidrios o vendiendo cigarrillos, dulces, chicles, nueces, frutas, cómics, libros para colorear, agua, refrescos y cervezas. Ahora que esa demanda ha colapsado, su número es más reducido. Nadie sabe dónde han ido, pero ellos no pueden permitirse quedarse encerrados esperando por la ayuda inexistente del gobierno, entonces deben seguir trabajando afuera, en la llamada economía informal, ¿al aire libre?.

En estas intersecciones, además de la vista del verde oscuro de las montañas y de los barrios de la ladera que se elevan a mil metros sobre el suelo del valle subtropical, al este, puedo ver mi universidad al frente de la quebrada estrecha que separa esta tierra de nadie de La Iguaná. Pero ha estado cerrada desde marzo. Los restaurantes y las tiendas pequeñas de La Iguaná solían beneficiarse de los consumidores estudiantes

de la universidad, hasta que las autoridades de la universidad cerraron la salida y construyeron otra en 2018 sin consultar con nadie de la comunidad universitaria ni mucho menos con La Iguaná, cuya gente es de piel oscura, más pobre y propensa a ser desplazada por el conflicto armado colombiano en sus fronteras, o por la implosión de Venezuela en las suyas. Allí, en La Iguaná, un joven afrocolombiano me corta el pelo, imprimo las fotocopias de las lecturas para mis clases, como empanadas hechas por Doña Fany y charlo con ella y su esposo. O lo hacía, antes de todo esto.

Después de salir de la intersección y estar de vuelta en el camino que se dirige al oeste bajo las copas de los árboles—incluido un generoso árbol de mangos con hojas que se tornan anaranjadas y que caen para acolchar el suelo—, llegamos en poco tiempo al cruce de la av. 65 y la c. 65. La carrera 65 circula en sentido norte-sur, paralela a la “autopista”, y señala el borde occidental de mi barrio (la av. Colombia señala su borde del sur, la autopista norte-sur su borde oriental y la quebrada señala su borde del norte). Encima hay un puente de dos carriles que generalmente está bloqueado con filas de volquetas, motos, carros y vehículos de transporte de carga y en el que se encuentran entre 10 y 14 adolescentes y chicos y algunas mujeres adultas o adolescentes.

Ellos me conocen porque me han visto cruzar el puente entre Carlos E. y La Iguaná cuando me dirijo al trabajo. Me saludan y piden que Dios me bendiga. Uno de ellos, aunque resulta inusual porque es de mi generación, me pregunta si puedo

llevarle medio kilo de arroz la próxima vez que salga. Solía haber artistas de circo y acróbatas tatuados y perforados, muchos de ellos de Argentina u otras partes de Colombia, trabajando en el cruce peatonal y realizando hazañas increíbles como trepar escaleras y hacer malabares con machetes arriba de ellas, pero se han ido.

Además, el número de los que trabajan en el semáforo en frente de la calle, desde donde la gente se dirige al centro de la ciudad en vez de a los barrios marginales, se ha reducido mucho. Es un grupo mínimo, tal vez ocho, comparado con el doble que había en épocas normales. En un buen día, treinta o cuarenta personas solían trabajar en las distintas partes de la intersección. En abril y mayo, todos los barrios rompieron la cuarentena al alzar banderas blancas y rojas en protesta por el hambre, pero esas se han caído.

Quién sabe que les pasó a los organizadores. Recientemente, un chico alto y joven que usaba tapabocas me dijo que no había comido en todo el día. Estoy seguro de que él no era el único. Al cruzar una vez más la av. 65 hacia el sur, estamos de vuelta en la tranquilidad y seguridad aparente y relativa de Carlos E.

La mayoría de los días estoy encerrado en mi apartamento 23 horas al día.

## La nación que no fue

Recientemente, la Fiscalía afirmó que, a través de la participación de los estudiantes, egresados y profesores, la Universidad Nacional, donde trabajo, está vinculada a la única insurgencia restante

de la guerrilla, el ELN (que ahora opera principalmente en Venezuela en gestión de armas, drogas y fraudes de secuestro y extorsión). Esto se tomó del guión de una guerra fría que nunca termina. El gobierno nos etiquetó como terroristas y nos expuso a agresiones físicas o, en el caso del egresado de la Universidad Nacional Mateo Ruíz, la desaparición.

Primero, por su puesto, resistimos colectivamente y a través de la escritura: en Bogotá, que es la abanderada, la Facultad de Derecho, los estudiantes y egresados presentaron una queja formal (la cual el juzgado rechazó); nuestro sindicato de profesores también denunció la amenaza, así como las principales organizaciones de estudiantes. Los estudiantes y profesores se tomaron los principales programas de radio, columnas de opinión y las redes sociales para presentar su caso a la opinión pública. Esta apoya casi unánimemente el movimiento estudiantil y rechaza la represión gubernamental y paraestatal en demandas como la matrícula gratis, en la que actualmente estamos ganando, excepto en la Universidad Nacional, en la que los estudiantes iniciaron una ocupación en las puertas de la universidad. Con el paro general tuvimos al gobierno contra las cuerdas en 2019, tal como lo hicimos con el paro estudiantil en 2018, de alcance más limitado. Ahora planean cobrarnos los intereses.

En una síntesis magistral escrita poco después de la trascendental Constitución de 1991, la cual pretendía funcionar como un puente para el Estado de derecho y para alejarse de la guerra civil, el historiador David Bushnell se refirió a

Colombia como una nación a pesar de sí misma. Fue una ilusión, una teleología liberal del fin de la historia: el proyecto de construcción de la nación contrainsurgente patrocinado por Estados Unidos apenas empezaba a rechazar la expansión rápida de las guerrillas rurales en la frontera interminable de coca de Colombia, en sus fronteras de minería y energía, en sus fronteras agroindustriales y en la mayoría de sus municipios e incluso ciudades.

Si hubo una década que destruyó al país como la horrible violencia bipartidista de la década de los cincuenta e hizo pedazos la idea de la soberanía nacional, fue la década de los noventa. Al final de la década, había más de 400 masacres paramilitares anuales. Se inició el “Plan Colombia” respaldado por Estados Unidos, diseñado aparentemente para reducir a la mitad la producción de cocaína: el 80 % se destinó a la policía y las fuerzas armadas colombianas, quienes trabajaron con los paramilitares contra las FARC y el ELN, o, más a menudo, contra los colombianos que vivían en áreas en las que estaba activa la guerrilla. Vacíen el mar y los peces no nadarán. De 2006 a 2010, las fuerzas armadas colombianas desaparecieron más de 10 000 civiles y los camuflaron como muertes de la guerrilla para aumentar el número de bajas. Ahora, el Departamento de Justicia de Estados Unidos los investiga por usar equipos de comunicación donados por Estados Unidos para cometer delitos de extorsión y espionaje contra enemigos políticos.

Tal como dijo un analista en el momento, no había ningún político dispuesto y capaz de implementar la Constitución



de 1991, cuyas disposiciones en cuanto a la autonomía indígena no solo se convirtieron en letras muertas, sino que su aprobación precedió a un registro histórico de muertes indígenas, ya que la maquinaria de guerra desterró, desapareció, torturó y masacró a indígenas a una escala totalmente nueva. La misma tragedia les ocurrió a los afrocolombianos en el Pacífico, quienes lograron la disposición para los títulos de tierra colectivos en 1993, a raíz del modelo de autonomía indígena a través de la tenencia de tierra comunal, pero estas tierras eran codiciadas por empresas de explotación minera y forestal, así como por traficantes de droga también ganaderos y paramilitares. Por no mencionar las plantaciones de palma africana de capital intensivo que predominaban.

En ninguna parte se presenciaron una tragedia más grande que en lo que la oligarquía local nombró “la mejor esquina de América”: Antioquia, especialmente la subregión de Urabá en la costa caribeña, cerca de Panamá y próxima a Córdoba. En Antioquia, Álvaro Uribe gobernó de 1995 a 1997, y Córdoba fue el hogar de sus fincas ganaderas más grandes (su vecino fue el líder paramilitar extraditado Salvatore Mancuso, quien afirmó haber contribuido a las dos campañas presidenciales de Uribe), así como el Chocó en el Pacífico, el cual está lleno de oro, maderas duras y plantaciones de palma africana. La salida caribeña de Antioquia en el golfo de Urabá, con su capital en Turbo, es la zona de plantación bananera y, al final de la década de los ochenta, la zona cero del terror contrainsurgente como la formación estatal.

Allí, los niveles de homicidios superaron los de Medellín cuando Uribe era gobernador a mediados de la década de los noventa, y disminuyeron poco después. Incluso más que los nasa en el suroeste del Cauca, el tercer grupo indígena más grande (y el más cohesivo políticamente) de Colombia, con 243 176 personas según el censo del 2018, el segundo grupo más grande, el zenú, con 307 091 personas, fue devastado, desterrado, dispersado y acorralado por el avance de los paramilitares contra las insurgencias del ELN y las FARC en el territorio zenú, en el noroeste: en Antioquia, Córdoba, Chocó y Sucre. Lo único que permanece intacto son dos resguardos, como le llaman a las reservas, en Urabá y Córdoba.

Víctor Peña, un viejo miembro de la Guardia Indígena (fuerza de seguridad) en Tuchín, Córdoba, organizó el primer Cabildo indígena zenú urbano debido a la cantidad de zenúes que vinieron a Medellín durante y después de la década de los noventa. En la actualidad hay 500 en la ciudad (los emberá ascienden a 900 y son el sexto grupo indígena más grande de Colombia con 56 504 personas). En comparación, los afrocolombianos alcanzaron el 10 % de la población total de la ciudad, es decir, 236 222 personas; en 2010, constituían probablemente el 20 % de la población nacional. Según el censo del 2018, 150 grupos indígenas constituyen el 4 % de la población total de Colombia, liderados por los wayuu en la Guajira, quienes alcanzan los 380 460. (El más reciente y grande escándalo de corrupción involucra a los narcoparamilitares en el

pago de mucho dinero para que los clasificaran como indígenas y así no pudieran ser extraditados a Estados Unidos).

Debido a que el gobierno colombiano solo reconoce a los indígenas en su territorio, los desplazados y los indígenas de lugares urbanos no existen oficialmente. Por esta razón, el primer paso de Víctor ha sido luchar por el reconocimiento oficial con el fin de poder calificar para la ayuda del gobierno. En el contexto de la pandemia y sin ayuda de las autoridades, Víctor y yo hemos recolectado alimentos básicos y tapabocas, especialmente para las madres solteras zenúes, así como tapabocas, alcohol, gel y desinfectante hecho localmente en la Universidad de Antioquia para las 200 familias zenúes en Tuchín, las llanuras tropicales en las que estos se venden al doble del precio. Allí, se necesitan veinte días para obtener los resultados de una prueba. A un hombre se los enviaron después de que murió.

Últimamente, Víctor está a menudo al borde de las lágrimas: ya no es capaz de ayudar a las personas —sobre todo a las madres solteras— que lo llaman porque necesitan atención médica, comida, refugio y ayuda con el papeleo. Ya no puede ejercer como un cacique debe hacerlo. Tampoco puede vender los sombreros que hace y por los que los zenúes son reconocidos nacional e internacionalmente. O se le olvida o no puede permitirse comer apropiadamente. Tampoco está durmiendo. Recientemente tuvo que volver a su hogar a sepultar a su mamá, quien murió de COVID-19. Él y sus hermanos pidieron dinero prestado para pagar el ataúd.

Durante tres meses, la Guardia Indígena mantuvo la COVID-19 fuera de la comunidad, gracias a que nadie tenía permitido entrar o salir del territorio zenú, ni siquiera Víctor. Sin embargo, lo más probable es que la COVID-19 llegó a través del transporte y la distribución de alimentos y gasolina. Aunque Víctor logró regresar a casa, en el viaje de regreso a Medellín, su bus se detuvo en el lugar en el que el ejército y el ELN habían acabado de tener un enfrentamiento, por lo que él no pudo avanzar por varios días y casi se queda sin dinero. Tomó un bus en la noche, aterrizado de que los narcoparamilitares fueran a detenerlo y que, debido a su liderazgo, el cual los alcaldes de Medellín y Tuchín reconocen oficialmente en las cartas que lleva con él, fueran a desaparecerlo en algún lugar a lo largo de la ruta

No mucho tiempo después de haber sepultado a su madre, tuvo que pedirme prestado dinero para comprar comida y gasolina para volver a su casa en una moto prestada y sepultar a su abuela, quien murió de COVID-19. De nuevo, no pudo volver a Medellín debido a los controles de carretera del ejército. Yo estaba preocupado porque él tuvo que quedarse dos noches en Caucasia, en las llanuras del Bajo Cauca antioqueño, un lugar disputado por múltiples mafias narcoparamilitares y facciones de la guerrilla y militarizado por el ejército y la policía. Es uno de los municipios más peligrosos en una región muy peligrosa. La primera noche, al igual que otras personas, durmió afuera en cajas de cartón detrás de la estación de policía. No estaba con su familia, y si los

narcoparamilitares lo hubieran identificado, lo hubieran desaparecido. Lo mismo hubiera sucedido con las facciones de la guerrilla (el ELN no tiene un monopolio), ellos hubieran dicho que él había llegado de un territorio paramilitar y probablemente lo hubieran secuestrado o asesinado. Le presté dinero para comida y refugio. Después de arreglar una llanta pinchada —más dinero prestado— llegó a su casa después de conducir toda la noche en un aguacero. Tiene reuniones importantes en las primeras horas de la mañana.

Hay una serie de casos en Tuchín y San Andrés de Barlavento, uno de los resguardos de los zenúes. Víctor está preocupado por el genocidio. Además de su madre y su abuela, las personas que conoce y con las que creció están muriendo, y él no puede evitarlo. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en abril de 2020, 191 000 familias indígenas estaban en riesgo de contagio y 513 000 familias en riesgo de crisis humanitaria o hambruna. El miedo de Víctor al genocidio es justificado y se extiende a los otros 114 grupos que se identifican como indígenas. En caso de que ocurriera, sería un genocidio previsto, así como en Perú, Chile y Brasil. Nada similar ha ocurrido desde la llegada de los conquistadores en el siglo dieciséis.

## Conclusión: buscar entre los restos

Tal vez no todos los hilos de este ensayo se conectan, pero con suerte hay suficiente coherencia entre los fragmentos y las

ruinas. Y, con suerte, el esfuerzo por alargar o doblar la teoría y el método —para ponerlos a prueba contra el fuego de la materia empírica local: materia orgánica e inorgánica, flora y fauna, pasado y presente, vida y muerte— vale la pena. En vez de, al contrario, es decir, subordinar el material empírico local a la camisa de fuerza teórica que excluye o hace invisible lo que está justo en frente de nosotros.

Aunque suene vulgar, para mapear esta nueva realidad salvaje necesitamos abrir nuestros ojos y oídos a la manera de Charles Olson. Hace veinticinco años, recuerdo que Sidney Mintz le dijo a un grupo de profesores y estudiantes de posgrado de la Universidad de Pittsburgh que debemos olvidarnos de Foucault y en su lugar debemos escuchar a escondidas las conversaciones en el bus, el enfoque metodológico que yo ya había adoptado. En su acento de Brooklyn imposible de erradicar, nos pidió con insistencia usar el transporte público, lo cual yo había estado haciendo en parte por esa razón. De esta manera, en mi propia escuela privada de Sidney Mintz —que se cruzó brevemente con William Roseberry, bajo cuya orientación estaba previsto que trabajara antes de su muerte prematura— decidí que la antropología debía estar en las (malas) calles de las ciudades de Latinoamérica, con el fin de democratizar el conocimiento y hacerlo verdaderamente público.

¿Y qué pasa con la historia?, ¿qué diferencia hace?, ¿cómo puede ayudarnos política e intelectualmente en la actualidad? Como EP Thompson insistió, la historia es una disciplina de proceso y

contexto, y no podemos situarnos espacial o temporalmente sin ella. Tal como explica el epígrafe de Williams, la historia nos ayuda a salir de nosotros mismos, al menos momentáneamente, y a volver al presente con una perspectiva renovada de los posibles futuros alternos y de las decisiones por tomar en el presente. La amnesia histórica es uno de los resultados predecibles de la mercantilización de la cultura, y nuestro tiempo —una época de incertidumbre, neofascismo y redes sociales— es particularmente amnésico, por tanto, está particularmente a la deriva.

Esto es cierto en la antropología como en cualquier otra disciplina o esfuerzo creativo, artístico e intelectual. Necesitamos la historia simplemente para evitar el mareo y el vértigo que han provocado los cambios dramáticos y acelerados de la acumulación de capital y de la formación estatal en la producción de mercancía y reproducción social de las últimas décadas. Además, como espero haber demostrado, también la necesitamos para darle sentido a quienes vinieron a vivir —dónde, a hacer qué y por qué— aquí en Medellín, el Valle de Aburrá, Antioquia, así como en los departamentos cercanos del Chocó y de Córdoba.

Por supuesto, la unión propuesta de la historia y la antropología es apenas nueva: *A Century of Violence in a Red City* (Un siglo de violencia en una ciudad roja) de Lesley Gill, que trata sobre la reconstrucción de la clase trabajadora a través del terror en el puerto de petróleo colombiano de Barrancabermeja, ofrece un ejemplo. Pero lo que pretendo aquí se trata más de la supervivencia de la consciencia histórica y

la consciencia antropológica en esta época de desastre, muerte y destrucción innumbrables. Para darle sentido a la trayectoria de Víctor Peña, o a la etnicidad racial más ampliamente en relación con la escala, tenemos que explicar cómo las capas de las tragedias históricas anteriores —la formación estatal contrainsurgente respaldada por Estados Unidos y su resultado legítimo, el narcoparamilitarismo, en la ciudad, la región, el país y en el hemisferio desde 1990 hasta 2010— se superponen a la crisis actual.

De ahí la importancia del Libro de los pasajes de Walter Benjamin: para leer lo que vemos en el semáforo de la 65 con la 65 o a lo largo del camino en la tierra de nadie, necesitamos descifrar los jeroglíficos y las ruinas, para filtrar a través de la acumulación de las capas históricas que son el resultado de décadas de guerra contrainsurgente, lucha de clases, formación estatal y acumulación de capital en Medellín, Antioquia, Córdoba y el Chocó, “la mejor esquina de América”. Tenemos que hacer una excavación arqueológica para poder revelar los horrores que ocurrieron antes de nosotros.

Este ensayo ha ilustrado y ha confirmado la octava tesis de Benjamin en la filosofía de la historia, es decir, “La tradición de los oprimidos nos enseña que el ‘estado de emergencia’ no es la excepción sino la regla”. Ser testigo sin moralismo (y mucho menos teatro); estar presente para acompañar los movimientos raciales y etnohumanistas, que también son movimientos de clase, por la justicia, la igualdad y la democracia; entender y explicar

de dónde vienen y cómo se sostienen contra todas las probabilidades —observación participante para el siglo veintiuno, si se desea— es tal vez lo mejor que podemos hacer en términos de mapeo cognitivo.

La prueba debe estar en el postre, y, como la aplicación de la idea de Charles Olson en *The Opening of the Field* (La apertura del campo) de Robert Duncan, una práctica textual debe ser más convincente que la teoría:

“El pasado y el futuro  
están llenos de desastres,  
esplendores que golpean la tierra,  
mares que se elevan para ensombrecer las orillas  
y para rugir en ellas.  
Es el universo suspendido por la palabra  
humana,

como si obedeciera a nuestro miedo,  
a la predicción del fin del mundo,  
al hombre del Diluvio o al Tigre de Fuego,  
a lo que se dice después de que ocurrió, lo  
que pasó o pasará...»

Robert Duncan, ‘Atlantis’”

Aunque es muy pronto para afirmarlo, dada la profundidad y el alcance de la crisis actual, la supervivencia de las disciplinas hermanas, así como el pensamiento crítico en sí mismo, puede estar en riesgo. Ofrezco estos destellos histórico-etnográficos en el conocido “momento de peligro” de Benjamin.

*Nota de la editorial:* Springer Nature se mantiene neutral con respecto a las demandas jurisdiccionales en los mapas publicados y las afiliaciones institucionales.